

TRIBUNA EMPRESARIAL

BUSINESS TRIBUNE

La actividad empresarial respetando los derechos humanos: una oportunidad para tod@s

Irene Bello-Quintana¹

Delegada en Canarias de Alianza por la Solidaridad, España

doi: 10.20420/eni.2019.297

Alianza por la Solidaridad es una organización de la sociedad civil, que canaliza el esfuerzo y el apoyo de más de 40.000 personas entre soci@s, voluntari@s, simpatizantes y trabajador@s para luchar contra las desigualdades y contribuir a proteger los Derechos Humanos en América Latina, África, Oriente Medio y Europa.

La forma más eficaz de luchar contra las desigualdades y la injusticia global es a través de la construcción de una ciudadanía activa, crítica y comprometida que se organiza para la defensa de los Derechos Humanos y la articulación de políticas públicas justas.

Alianza por la Solidaridad contribuye con sus iniciativas a empoderar a las personas, sus colectivos y comunidades para que tomen las riendas de su futuro y sean capaces de transformar sus sociedades, corrigiendo las desigualdades de raíz y de manera sostenible.

Trabajamos en red, construyendo alianzas entre diversos agentes y espacios de participación a nivel local, nacional y global.

Una de las áreas de intervención de Alianza es el Desarrollo Local Sostenible, tratamos de reconducir algunas de las pautas insostenibles del

actual modelo de producción y consumo en países industrializados que generan graves impactos en las poblaciones más empobrecidas de los países en desarrollo: mejoramos la capacidad de adaptación de estas poblaciones frente al cambio climático tratando de reducir su vulnerabilidad frente sus efectos. También apostamos por una gobernanza compartida de los recursos naturales incidiendo en lo político, reforzando las capacidades de las poblaciones, y apoyando modelos de gestión más igualitarios y participativos.

Para contribuir al cambio global desde iniciativas locales, promovemos a través de nuestras intervenciones y acciones de incidencia y comunicación modelos alternativos de desarrollo centrados en el bienestar de las personas que faciliten la consecución de derechos básicos:

Derecho al agua y saneamiento

768 millones de personas siguen sin tener acceso a fuentes de agua mejoradas y más de 2.500 millones de personas no tienen acceso a servicios de saneamiento dignos (cifras NNUU, 2013). El derecho humano al agua y saneamiento, reconocido como tal por Naciones Unidas en 2010, es aún inalcanzable para una

¹Autor de correspondencia: ibello@aporsolidaridad.org

parte importante de la población con la que trabajamos, lo que hace que para Alianza por la Solidaridad siga siendo una de nuestras prioridades de trabajo:

Acceso, gestión y control del suministro de agua potable segura, aceptable, accesible y asequible

Servicios de saneamiento de buena calidad y en cantidad suficiente

En los últimos 15 años, gracias a numerosas intervenciones en países como Guatemala, Marruecos o Vietnam hemos contribuido a que miles de mujeres y hombres tengan acceso a agua potable. En Centroamérica, trabajamos desde 2012 para que más de 28.000 mujeres y hombres de Nicaragua, Guatemala y El Salvador tengan acceso a agua potable. Además, para garantizar que los sistemas instalados sean duraderos en el tiempo, apoyamos en la legalización y el fortalecimiento de 73 juntas y comités de agua comunitarios para que a finales de 2014 las poblaciones puedan gestionar de manera participativa los servicios instalados.

Derecho a la alimentación y lucha contra el hambre

Modelos sostenibles de producción a pequeña escala (ganadería, pesca y agricultura): recuperación de prácticas tradicionales, técnicas de producción sostenibles para un mejor aprovechamiento del suelo y los cultivos, bancos de semillas (disminución dependencia de semillas de grandes multinacionales y menor vulnerabilidad ante las sequías)

Comercialización agroecológica de cercanía en condiciones justas

Derecho a la tierra

Acceso y control (titularidad) equitativo de la tierra

Planes de ordenamiento y gestión participativa del territorio y de los recursos naturales

Derecho a un medioambiente sano

Adaptación al cambio climático: diversificación de cultivos, realización de estructuras que impidan el avance de la salinización y/o desertificación...

Eficiencia energética

Gestión de residuos sólidos

Gestión sostenible de los ecosistemas

En el marco de nuestras actuaciones, surge la Campaña TIERRRA (empresas Rentables pero Responsables con los Recursos), pensada y creada para promover que las empresas desarrollen su actividad respetando los derechos humanos, evitando fenómenos como el acaparamiento de tierras y agua o su mala utilización. TIERRRA apela a la responsabilidad colectiva para preservar los recursos de las personas frente al poder de las grandes corporaciones, que ponen sus intereses por encima de los de la gente.

A través de la campaña TIERRRA, buscamos casos empresariales con impactos positivos en su entorno (o por lo menos, que no generen efectos negativos) que sirvan de ejemplo para el resto de empresas.

Por desgracia, en esa búsqueda de casos positivos, seguimos encontrando ejemplos de mala praxis empresarial como es el caso actual en Alta Verapaz (Guatemala) donde más de 29.000 indígenas quekchí están en peligro por la construcción del complejo hidroeléctrico Renace, a manos de la empresa española Cobra (Grupo ACS), propiedad de Florentino Pérez. Cada día que pasa, ven como el río Cahabón, del que viven, está perdiendo su caudal a causa de este proyecto cuyo propietario es el grupo guatemalteco Corporación Multi-Inversiones

(CMI). Tras una amplia investigación que ha durado dos años, Alianza por la Solidaridad desvela los graves impactos en el medioambiente y las vulneraciones contra las comunidades que viven en las orillas del río, así como la criminalización de los opositores al proyecto.

“No conozco a ninguna empresa que haya quebrado por invertir en derechos humanos; y algunas que sí por no hacerlo”. John G. Ruggie

Empresa y derechos humanos no sólo no son conceptos contradictorios, sino que se apoyan mutuamente. Como declaró el Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en su informe provisional, "se considera en general que el desarrollo económico unido al estado de derecho son la mejor garantía para toda la gama de derechos humanos".

Una inversión que cumple con criterios socialmente responsables no sólo puede aumentar la rentabilidad y los beneficios económicos de la empresa, sino que evita efectos negativos sobre las personas y su entorno.

Basadas en la experiencia de Alianza por la Solidaridad, algunas pautas para fomentar las inversiones responsables:

Realizar un estudio de impacto social y ambiental de actividades

Establecer criterios de responsabilidad social, medio ambiente y laboral y vigila que se cumplan sobre toda tu cadena de suministro

Tomar las medidas para cumplir con la legislación vigente en materia laboral, de seguridad social y fiscal, así como en materia de Prevención de Riesgos Laborales tanto de España como de los países en los que vas a invertir

No realizar prácticas contrarias a los derechos protegidos por los 8 convenios de la OIT referidos a trabajo forzoso, trabajo infantil y al derecho de sindicación

Respetar el medio ambiente cumpliendo con la legislación vigente en su país de origen y manteniendo los mismos estándares exigidos en España

Contemplar en el plan de negocio hacer uso de insumos locales (semillas) y agroecológicos (abono orgánico, insecticidas naturales, etc...)

Los derechos de uso de la tierra y de los recursos que se derivan del derecho consuetudinario, es decir de la costumbre, como por ejemplo la herencia de la tierra deben ser respetados

Antes de adquirir una determinada superficie de tierra e iniciar la actividad, es necesario asegurar que la población que previamente ha trabajado esas tierras está informada y ha dado su libre consentimiento

Si no es así, y hay campesinos/as trabajando esa tierra debes renunciar a la adquisición de esos terrenos

Es importante involucrar a los pequeños productores en la cadena de valor de la empresa, así no sólo se conseguirá beneficios, sino que también se estará potenciando el desarrollo de la zona

La reivindicación de los derechos humanos para todas las personas del planeta, sin discriminación alguna, pasa necesariamente por la construcción de una ciudadanía global. Así entendida, la ciudadanía global es un proceso de transformación activa, tanto individual/personal como colectiva/social, de recuperación de lo político y del espacio público para exigir a las instituciones públicas que reconozcan y garanticen el acceso a los derechos, con transparencia y rindiendo cuentas a la

ciudadanía. Para ser global, esta lucha por los derechos y por la participación en la vida pública tiene que llevarse a cabo en todos los espacios (local, nacional, regional e internacional) y por parte de todos los actores de la sociedad, donde la empresa juega un rol fundamental.

La empresa, no sólo no puede quedarse al margen de esta reivindicación sino que debe ser motor, en tanto generador vital de movimiento económico, puestos de trabajo y, en conclusión, de bienestar, del respeto a dichos derechos.